



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**“Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por
sentencia apelada en el código penal militar policial”**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

Arroyo Ventocilla Rosa Paola

ASESOR:

Santisteban Llontop Pedro Pablo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2017

Página del Jurado

Dr. Guisseppi Paul Morales Cauti
Presidente

Dr. Jimmy Rómulo Marquez Moreno
Secretario

Dr. Angel Fernando La Torre Guerrero
Vocal

Dedicatoria

A mis padres y abuelas, quienes son mi razón de seguir adelante, la luz que alumbra y guía mi camino, por su apoyo absoluto y empuje que han permitido que culmine la carrera de Derecho.

Agradecimiento

A Dios, por darme el conocimiento y fortaleza para culminar esta etapa académica de mi vida.

A mi Centro de Estudios “Universidad César Vallejo” escuela de Pregrado.

A mis padres, por la ayuda constante durante el desempeño de mis estudios.

A mi asesor Dr. Pedro Pablo SANTISTEBAN LLONTOP.

A todos aquellos que me apoyaron incondicionalmente para la elaboración de este presente trabajo.

Declaración Jurada de Autenticidad

Yo Rosa Paola Arroyo Ventocilla con DNI N° 45590392, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 30 de Junio de 2017

Rosa Paola Arroyo Ventocilla
DNI N° 45590392

Presentación

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación titulada: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DISPUESTA POR SENTENCIA APELADA EN EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL

Constituye una satisfacción académica el haber desarrollado el presente trabajo de investigación, el cual ha sido realizado con denodado esfuerzo y motivación buscando realizar un aporte jurídico significativo al debate doctrinario. Es por ello que dediqué bastante tiempo y energía en el análisis de fuentes legales que hicieron posible abordar y contextualizar el tema; del mismo modo, incidir en la problemática que con el juicio de expertos me permitió establecer con claridad sus implicancias y supuestos.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la justificación; en la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño descriptivo. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

La autora

ÍNDICE

Página de jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
Aproximación temática	3
Trabajos previos	4
Teorías relacionadas al tema	7
Formulación del problema	24
Justificación del estudio	25
Objetivos	26
Supuestos jurídicos	26
II. MÉTODO	28
2.1 Tipo de investigación	29
2.2 Diseño de investigación	29
2.3 Caracterización de sujetos	29
2.4 Población y Muestra	30
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	30
2.6 Métodos de análisis de datos	30
2.7 Tratamiento de la información: Unidades Temáticas, Categorización.	31
2.8 Aspectos Éticos	31
III. RESULTADOS	33
IV. DISCUSIÓN	42
V. CONCLUSIÓN	48

VI. RECOMENDACIONES	50
VII. REFRENCIAS	51
VIII. ANEXOS	54
Anexo 1: Matriz de Consistencia	55
Anexo 2: Fichas de Validación de Instrumentos	
Anexo 3: Instrumentos	

Resumen

Mediante el presente trabajo de investigación se busca determinar cuáles son las consecuencias que se podría producir cuando una sentencia en primera instancia en el proceso penal militar policial es impugnada mediante apelación, debido al efecto suspensivo de la ejecución de la pena privativa de libertad que sufre de manera automática con el sólo hecho de presentar el recurso impugnatorio. El diseño de investigación es descriptivo con un enfoque cualitativo, asimismo, la población está constituida por especialistas Jueces y Fiscales del Fuero Militar Policial del departamento de Lima. La técnica de recolección de datos son: análisis de marco normativo, análisis de sentencia, análisis de resolución y una guía entrevista con ocho preguntas, con las que el entrevistado dará su opinión en base a sus conocimientos y experiencias laborales sobre las consecuencias que se podrían dar con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en el proceso militar policial, tal como lo indica el artículo 464° del Código Penal Militar Policial.

Se concluye lo siguiente; Con la regulación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial se abre la posibilidad de que existan consecuencias que impedirían continuar con el proceso como por ejemplo los peligros procesales tales como el peligro de fuga, el incumplimiento de la sentencia e incluso la reincidencia delictiva por lo que es necesario implementar un mecanismo mediante el cual se asegure el acatamiento de la sentencia en caso de ser confirmada en el proceso penal militar policial, para así poder evitar los peligros de fuga que se pueden dar por causa intencional del imputado.

Palabras Claves: pena privativa de libertad, suspensión de la ejecución, recurso de apelación.

Abstract

The present research seeks to determine what are the consequences that could occur when a sentence in the first instance in the military criminal police process is challenged by appeal, due to the suspensive effect of the execution of the custodial sentence that suffers from Automatic way with the mere fact of presenting the contentious resource. The research design is descriptive with a qualitative approach, likewise, the population is constituted by specialists Judges and Prosecutors of the Military Police Force of the department of Lima. The data collection technique is: normative framework analysis, sentence analysis, resolution analysis and an interview with eight open questions, which allow the interviewee to offer their opinion based on their knowledge and work experience on the consequences that could be given With the suspension of execution of the sentence of deprivation of liberty in the military police process, as indicated in article 464 of the Military Criminal Police Code.

The following is concluded; With the regulation of article 464 of the Military Police Criminal Code opens the possibility that there are consequences that would prevent the continuation of the process such as procedural hazards such as the danger of flight, failure to comply with the sentence and even criminal recidivism by Which is necessary to implement a mechanism by which to ensure compliance with the sentence in case of being confirmed in the military criminal police process, in order to avoid the dangers of escape that can occur due to the intentional cause of the accused.

Keywords: Penalty of deprivation of liberty, Suspension of execution, appeal.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la Justicia Militar Policial ha sido muy cuestionada, por los que la conocen, dado que en muchas oportunidades las decisiones tomadas por sus tribunales no son ejemplarizadores, ni de total satisfacción para la sociedad ya que los imputados por su naturaleza castrense son vistos, antes de cometer el delito, como entes revestidos de estricta disciplina, la misma que se ve resquebrajada cuando el delito cometido es de conocimiento de las autoridades, medios de comunicación y la sociedad en general, y ante ellos se exige una correcta sanción para el delincuente.

El Tribunal Militar Policial por su especialidad y ámbito de aplicación es poco conocido y por ende muy poco comprendido ya que esta justicia es aplicada a los miembros de las Fuerzas Armadas (Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú) y de la Policía Nacional del Perú y tienen un régimen totalmente distinto a las del fuero común ya que son jurisdicciones distintas sobre todo porque los bienes jurídicos que se protegen están relacionados a las infracciones cometidas por dichos miembros siempre y cuando afecte al servicio y a su institución; siendo el Fuero Militar Policial reconocido por nuestra Constitución Política del Perú en donde indica: “En caso de delito de función los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código Penal Militar Policial” (Constitución Política del Perú, 1993).

Es necesario mencionar que el artículo en mención indica que las disposiciones del Código Penal Militar Policial también serán aplicables a las personas civiles cuando cometan delitos de traición a la patria y de terrorismo por ser delitos que atenten contra la Seguridad Nacional y también serán aplicables a los que contravienen las normas del Servicio Militar Obligatorio.

Ya que este órgano jurisdiccional está encargado de sancionar las conductas punibles cometidas por los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de actividad, conocidos como delito de función, y siendo necesario que estas instituciones den un ejemplo a seguir por la formación castrense que llevaron y por ser ellos las personas a quien se les confía la Seguridad Nacional y

el Orden Interno de nuestro país, es imprescindible que cuando estos cometen delitos que afectan a sus mismas instituciones y por ende al Estado Peruano, se ejerza una correcta administración de justicia y se apliquen las sanciones correspondientes de tal manera que cumplan con el fin de la pena dentro de este sistema que es sancionar los delitos ya cometidos y prevenir la comisión de nuevos delitos por dicho personal y así evitar que crezca la desconfianza de la población hacia estas importantes instituciones que de por sí tienen la función de contribuir con el mantenimiento del orden, seguridad y disciplina y las mismas.

Aproximación Temática

En el proceso penal militar policial en primera instancia, se suspende la ejecución de la condena condenatoria que contiene pena privativa de libertad cuando la sentencia condenatoria es impugnada, ello en base al efecto suspensivo de la ejecución de sentencias señalado en el artículo 464° del Código de Penal Militar Policial, lo que puede generar problemas para la continuación del proceso o para la ejecución de la sentencia en caso de ser confirmada, así como la dilación del mismo e incluso la fuga del sentenciado por temor a ser privado de su libertad, cuando este sabe que tiene responsabilidad en el delito que se le imputa y pese a ello impugna la sentencia condenatoria con la finalidad de evadirse de la justicia, asimismo con la finalidad de evadir su responsabilidad podría cometer otros delitos para lograr que la sentencia impugnada sea revocada a su favor.

Por ello es necesario que se haga presente el poder que tiene el Estado para sancionar y ordenar que se ejecuten las sentencias emitidas por los Tribunales Militares Policiales, sin perjuicio de que estas sean apeladas, es decir si una sentencia es apelada el efecto de las mismas no se suspenda para que de este modo se pueda disuadir a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la comisión de los delitos de Función.

Esta decisión debe ser tomada en cuenta sobre todo cuando se trate de la comisión de delitos graves y dolosos, así como el comportamiento del imputado

durante el proceso, por ejemplo cuando tengan antecedentes como no haberse presentado a las diligencias donde se requirió su presencia y según el grado de responsabilidad del imputado, aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad para así respetar derechos de libertad individual y presunción de inocencia; y para ello el principio de presunción de inocencia debe de ser desvirtuado mediante prueba fehaciente como fotos, videos, pericias, etcétera.

Aunado a la problemática tenemos que mencionar que la lectura de la sentencia en el proceso penal militar policial con base en el artículo 410° segundo párrafo del Código Penal Militar Policial (2010) indica que: “La sentencia será leída en audiencia pública. Las partes quedarán notificadas con su lectura integral”. Lo que significa que para la lectura de una sentencia no es necesaria la presencia del imputado ya que basta con que en la audiencia de lectura de sentencia sea pública, entonces siendo ello así sería imposible la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria por la evidente ausencia del sentenciado, lo que facilitaría la evasión de la justicia por parte de este.

Como ejemplo tenemos el caso del General EP Juan Arturo Quintana Briceño quien mediante sentencia N° 003-2014-SSG/Rel del 15 de Octubre de 2014, fue sentenciado a cuatro años seis meses de pena privativa de libertad por la comisión del delito de Deserción, sentencia que fue confirmada con la Resolución de apelación de Sentencia N° 03 del ocho de Enero del 2015 momento en el cuál este ya se encontraba prófugo por lo que tuvieron que disponer su ubicación y captura, logrando capturarlo recién el 14 de Octubre del 2016, es decir dos años después de emitida su sentencia en primera instancia.

Trabajos previos

Después de una búsqueda de trabajos previos, no se ha llegado a encontrar tesis relacionadas al tema debido a que la justicia militar policial no ha sido objeto de investigación a profundidad; sin embargo se ha llegado a obtener como fuentes estudios realizados y plasmados en artículos.

Antecedentes Nacionales

Schiaffino (2014) en su estudio sobre El derecho a libertad personal y la incorporación de la ejecución provisional de condena efectiva en el código penal militar policial recomienda: “encargarse el proyecto de ley que plantea la incorporación en el Código Penal Militar Policial de la ejecución provisional de la condena de pena efectiva sin perjuicio de la impugnación realizada a la sentencia en primera instancia (...)” (Schiaffino, 2014, p.107).

En este artículo Schiaffino quien actualmente trabaja en el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar, después de estudiar la realidad con respecto a la falta de regulación de la ejecución provisional en el Código Penal Militar Policial, recomienda se incorpore dentro de este, apoyando de este modo nuestro trabajo de investigación, pese a que lo analiza desde el punto del derecho a la libertad, pues concluye que este derecho tiene límites cuando los derechos de los demás han sido trasgredidos.

Giles (2014) en su estudio sobre Función de la Pena Militar Policial presenta como una de sus conclusiones que:

La condena condicional no es aplicable en el Fuero Militar Policial por interpretación de la función preventiva general de la pena militar policial, tanto en sus vertientes negativa y positiva, debido a que tal sanción no permite disuadir a la generalidad del personal militar y policial en situación de actividad de la comisión de delitos de función, ni crea confianza de la ciudadanía en el Código Penal Militar Policial y en el orden constitucional, siendo idónea la pena privativa de la libertad efectiva por cambiar una mera esperanza en la absoluta certeza de que el deber constitucional y primordial del Estado, consistente en resguardar a la población de la amenaza contra la seguridad que constituye el delito de función, se materializa con la sanción que corresponde. (Giles, 2014, p.61)

Con este estudio se concluye que la condena condicional no debe de ser aplicable a la justicia militar, posición que de alguna manera apoya la posición de esta investigación, ya que después de aplicar el artículo 464° del Código Penal Militar Policial y por ende al suspenderse la ejecución de la sentencia condenatoria se dictan una serie de reglas similares a la condena

condicional, que pueden ser aprovechadas por los sentenciados para evadir la justicia, entonces si no es aplicable la condena condicional en el fuero privativo debido a que no logra disuadir la comisión de delitos de función, tampoco es posible aplicar el artículo 464° del Código en mención.

Shaw (2014) en su trabajo de investigación: La suspensión de la ejecución de la pena - reglas de conducta y su incorporación en el Código Penal Militar Policial concluyen que “en el Código Penal Militar Policial existe un vacío legal por cuanto no contempla el denominado instituto de la suspensión de la ejecución de la pena y en cuanto a las reglas de conducta, advirtiéndose que el juzgador militar policial tiene que remitirse supletoriamente al Código Penal de la Jurisdicción Común”.

Velásquez (2009) en su Informe Práctico titulado ¿Ejecución provisional de la sentencia condenatoria? Especial Referencia a los casos en que se fija una pena privativa de libertad, concluye que “Aunque el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal del 2004 prevean la posibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia condenatoria; sin embargo, afirmando el principio-derecho a la presunción de inocencia y valiéndose del fin y sentido de la coerción procesal penal resulta absolutamente posible (necesario) imponer la prisión preventiva o la comparecencia, según sea el caso, para evitar el peligro que la fuga del sentenciado representa para la efectividad de la tutela jurisdiccional, y eventualmente para evitar la prisión cuando es innecesaria” (p.30).

Si bien es cierto este estudio está basado en el Código Procesal Penal, es decir, en el Fuero Común, sin embargo, el tema tiene relación directa con el trabajo de investigación, apoyando de igual manera este trabajo de investigación, indicando que efectivamente es necesario la imposición de una prisión preventiva para así evitar el peligro de fuga del sentenciado.

Arbieto (2003) en su Tesis: Las Deficiencias legales en la Justicia Privativa Penal Militar, para obtener el grado de abogado UNMSM, concluye que “Las sucesivas modificaciones legales en la Justicia Militar no han solucionado los problemas de

los constantes vacíos, que son recurrentes dado que a nivel procesal no se cuenta con los mismos mecanismos de supletoriedad que existen en el Proceso Penal Común”.

Antecedente Extranjero

Delgado (2001) en su estudio sobre: “Perspectivas de la Justicia Militar en Venezuela concluye sobre la necesidad de acercar la normatividad de los institutos castrenses a lo que se regula en el fuero común, en tanto y en cuanto ésta última ayude supletoriamente a superar los problemas de vacíos legales”.

Teorías relacionadas al tema

La Justicia Militar Policial

Es una jurisdicción distinta a la del fuero común, ya que es una institución autónoma e independiente que se encarga de investigar y juzgar las conductas punibles, tipificadas en el Código Penal Militar, de los efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han incurrido en delito de función, durante el acto de servicio o a consecuencia de este, también está encargada de juzgar a los miembros de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentren en situación de retiro pero que hayan cometido un delito de función cuando se encontraban en actividad; dicha jurisdicción tiene sus sustento legal en el artículo 173° de la Constitución Política del Perú que señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán sometidos, cuando cometan delito de función, al fuero respectivo, es decir, al Fuero Militar Policial y al Código de Justicia Militar que actualmente es el Código Penal Militar Policial, no siendo aplicable al personal civil a excepción de los delitos de terrorismo y traición a la patria, así como el personal que se encuentre cumpliendo el servicio militar obligatorio en una de nuestras Fuerzas Armadas por infringir las normas que regulen su servicio.

Asimismo en el artículo 139° literal 1 de la Constitución Política del Perú se reconoce la unidad y exclusividad de la jurisdicción y excepcionalmente la

jurisdicción militar y arbitral, reconociendo de este modo que si es posible la existencia de la jurisdicción militar policial.

La jurisdicción militar policial está encargada de velar por aquellos bienes jurídicos protegidos por el Estado relacionados a la estructura y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, teniendo como principal objetivo salvaguardar el orden y la disciplina de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú a través de la administración de justicia que en este fuero se imparte; es por ello que los procesos y resultados de estos se deben de dar con el debido rigor, de modo tal que tenga el efecto de persuadir al imputado de no cometer otros delitos y a los demás miembros estas instituciones para no cometer delitos de función que perjudiquen su trayectoria militar ni a la Fuerza a la que pertenecen y por ende al Estado, de ahí que esta jurisdicción tiene naturaleza ejemplarizadora.

El Delito de Función

El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N° 0017-2003-AI/TC 73-2003, con relación al delito de función que: “(...) es la acción plasmada explícitamente en la Ley de la materia, y que es perpetrada por un militar o policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales”.

Y remitiéndonos al Código materia de investigación, Código Penal Militar Policial, sobre el delito de función indica que:

El delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o un policía en situación de actividad, en acto del servicio o con ocasión de él, y que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. (Código Penal Militar, 2010)

En lo que concierne a la jurisdicción militar policial podemos deducir que el delito de función son aquellas conductas ilícitas que afectan los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, protegidos por el Estado, que necesariamente afecten las funciones que le son encomendadas durante su

servicio y que por mandato constitucional les compete, dichos actos deben de atender contra la organización, operatividad y cumplimiento de los fines de estas instituciones, como son en el caso de las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, es decir la Defensa Nacional, y en la Policía Nacional del Perú garantizar el orden interno, prevenir e investigar delitos entre otros.

Es necesario indicar que decir delito de función no es igual a decir delitos perpetrados en el ejercicio de la función, ya que los primeros se refieren a aquellos plasmados en el Código Penal Militar Policial relacionados directamente a esta investigación y afectan bienes jurídicos de carácter castrense; y los segundos hacen referencia a los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, quienes son acusados por la Comisión Permanente ante el Congreso de la República y que además se encuentran tipificados en el Código Penal.

Según Cubas (2015) se necesita que el hecho delictivo tenga relación directa con la funcionalidad militar o policial, según sea el caso, que los bienes jurídicos afectados sean necesariamente militares o policiales, que debido al principio de legalidad la conducta se encuentre tipificada en el Código Penal Militar Policial y que exista relación causal entre el delito y la función que tiene el sujeto activo.

Asimismo Cesar San Martín Castro en un acercamiento al delito de función señala que:

Desde las exigencias del tipo objetivo de lo injusto es posible adelantar tres elementos fundamentales: El sujeto activo del delito debe ser un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. La conducta o acción debe estar vinculada a la función militar o policial en su caso. El sujeto pasivo debe ser las Fuerzas Armadas o Policía Nacional como organismos reconocidos por la constitución a las cuales se les ha reconocido un conjunto de funciones o propósitos. (San Martín, 2001, p.164)

Entonces es preciso decir que a diferencia del fuero común en donde en la

mayoría de los delitos son cometidos por cualquier persona, en el fuero común es necesario que el sujeto activo sea un miembro perteneciente a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, que haya transgredido una norma ya sea con la acción o inacción de una de sus funciones y que estas afecten a sus propias instituciones ya que son estas el sujeto activo.

La Pena

El término pena deriva del latín poena que significa multa, partiendo de aquí veremos ciertas acepciones de la pena, ya que generalmente la pena es el castigo que se le impone a alguien que ha infringido alguna norma y ha afectado bienes jurídicos protegidos por el Estado; en todo caso la pena o sanción penal es la consecuencia jurídica que obtiene un delincuente como el resultado de una investigación y proceso penal.

Para Elky Villegas la pena es:

La reacción o respuesta (consecuencia jurídica) que impone el Estado, consistente en una medida afflictiva –al privar o restringir bienes jurídicos- como retribución de una violación al Derecho (violatoria en cuanto supuso una afección –lesión o puesta en peligro- de bienes jurídicos penales), contra aquel individuo que, habiendo sido sometido a un debido proceso, se le encontró culpable de la comisión de una conducta delictiva (...). (Villegas, 2014, p.16)

Como lo dice Donna (2008) la sanción penal sólo debe ser aplicada cuando el delito y la pena se encuentre especificada en la ley penal y para ello debe de haber sido dictada, en nuestro país, por el Congreso de la República según la Constitución Política del Perú; con relación al fundamento real hace referencia que sólo cuando el hecho, es decir la conducta delictiva, se adecue al hecho tipificado en la norma, podrá ser pasible de una sanción penal en base al principio de legalidad.

Asimismo al momento de evaluar cuál es la sanción penal a imponer es necesario respetar los principios de previsión de la pena entre los que se encuentran los el principio de legalidad, principio de lesividad, de culpabilidad, proporcionalidad, resocialización.

Clases de Pena en Perú

En el artículo 28° del Código Penal Peruano se encuentran establecidas las clases de pena los cuales son penas privativas de libertad, penas restrictivas de libertad, penas limitativas de derechos y multa.

Dentro de las penas privativas de libertad encontramos la pena privativa de libertad temporal que tiene una duración mínima de dos días (según el Código Penal) y máxima de treinta y cinco años, no pudiendo exceder dicho término por más que concurran varios delitos como en el caso del concurso real de delitos o concurso ideal de delitos. Y también tenemos la cadena perpetua que consiste en la privación de libertad de carácter indefinido y en la mayoría de casos es de por vida.

Con relación a las penas restrictivas de libertad el Código Penal Peruano en su artículo 30° sólo hace mención a la pena de expulsión del país, que es aplicada a extranjeros que han cumplido una pena privativa de libertad o a quienes se les concedió un beneficio penitenciario, esta sanción impide al extranjero reingresar al territorio nacional. Antiguamente existía la pena de expatriación, consistía en expulsar a un peruano del país, sin embargo el 27 de noviembre de 2009, mediante la Ley 29460 se suprimió dicha norma de la legislación peruana por contravenir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Clases de pena en el Código Penal Militar Peruano

A diferencia del Código Penal aplicado en el fuero común; el artículo 17° del Código Penal Militar Policial (2010) prescribe que las únicas penas aplicables de conformidad con este Código son: pena de muerte, por traición a la patria en caso de conflicto armado internacional; pena privativa de libertad; penas limitativas de derecho y Multa.

La Función de la Pena

Las sanciones penales fueron creadas para efectuar ciertos resultados, los mismos que a veces se apartan de su fin cuando se tipifica los delitos y sancionan las conductas delictuosas. La función de la pena más allá de su conceptualización, desempeña sobre todo una prevención general, relacionada con regular la convivencia en la sociedad.

La función de la Pena en el Código Penal Peruano

Según el artículo IX del Código Penal, la pena posee función de prevención, protección y resocialización.

Las funciones más importantes son la función preventiva que consiste en evitar, mediante la sanción penal, la comisión de delitos por parte de la sociedad, quienes al ver que los delitos son sancionados con ciertas penas desistirán de cometer delitos, esto es conocido como prevención general. Y la función resocializadora mediante la cual se rehabilita al sentenciado mediante un tratamiento que durará el tiempo en que el sentenciado cumple la sanción penal que se le impuso, para después ser reincorporado en la sociedad, esta acción es conocida como la prevención especial de la pena.

La función de la pena en el código penal militar policial

Por su parte el Código Penal Militar Policial en su artículo IX indica que la pena tiene función sancionadora, la cual recae directamente sobre la persona que cometió el delito y la función preventiva que sirve para disuadir a los demás de cometer delitos similares en razón de que serán sancionados de la misma manera.

La Sentencia

Es aquel documento emitido por una juez o una sala en donde se plasma la decisión final de un proceso, este documento consta de tres partes: expositiva (es una narración de manera sucinta de los hechos y de los principales actos del proceso), considerativa (en donde se plasman los fundamentos de hecho y derecho, en los que se basa para tomar la decisión) y resolutive (decisión final, en

caso de materia penal, en esta parte se indica si se condena o absuelve al acusado).

Manuel Frisancho en su Manual para la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, indica que sobre la sentencia que es una resolución del juez o sala penal, mediante la cual se pone fin al proceso penal, en donde se decide si el acusado es condenado o absuelto y también se resuelven todos los puntos con relación a la responsabilidad civil que fueron objeto de juicio (Frisancho, 2010).

Si bien es cierto la sentencia es un documento emitido, en este caso, por el Juez o Sala Penal Militar Policial, en la cual se plasma la decisión de estos con relación a la sanción que se le impone a los procesados que han cometido algún delito; sin embargo, la sentencia no pone fin al proceso penal, tan sólo le pone fin a la instancia ya que ésta puede ser impugnada, debido al derecho al debido proceso y a la doble instancia, lo que implica que el proceso penal continúa en segunda instancia en donde se puede revocar o confirmar la sentencia.

Asimismo De La Oliva (como se citó en San Martín, 2003) define a la sentencia como la resolución judicial que después de llevarse a cabo un juicio contradictorio oral y público, soluciona acerca del objeto del proceso, asimismo se absuelve a la persona acusada o declara que si existió un hecho tipificado como delito, imputando responsabilidad en la acción delictiva a uno o varios condenados, poniéndoles la sanción que le corresponde.

Dado a que en la sentencia, la decisión más importante es la situación jurídica del imputado, es necesario que tenga una debida motivación que es un derecho y garantía que tienen todas las personas; y por lo tanto es la obligación de los jueces y tribunales, que administran justicia, de justificar sus decisiones, después de analizar los hechos (circunstancias del delito) y realizar una apreciación debida de las pruebas, para la obtención de la verdad jurídica y realizar una imputación adecuada, sin caer en errores como lo serían la falta de motivación o motivación defectuosa. Para lo cual también deben de aplicar el principio de razonabilidad

que consiste en hallar un equilibrio, justificación lógica, entre la conducta, hechos y las circunstancias que conllevaron (motivaron) a la decisión del poder público, en este caso a un juez penal; resaltando que este principio tiene importancia cuando se trata de acciones relacionadas a restringir derechos a las personas (Cáceres y Luna, 2014). Y de proporcionalidad que consiste en la valoración de los hechos, el bien jurídico afectado y en base a ello aplicar la sanción que le corresponde.

Llevando estos conceptos a nuestro tema importa que toda pena impuesta debe de ser aplicada con una justa valoración de los hechos ya que este principio permite al juzgador equilibrar la pena o medida impuesta con los actos cometidos por el condenado y las pruebas que se hayan actuado en su contra, siendo de suma importancia ya que de no respetarse este principio el juez podría incurrir en arbitrariedad.

Asimismo para que la sentencia obtenga su eficacia jurídica debe de ser completa y coherente entre los fundamentos y motivaciones con lo sucedido durante el proceso y las decisiones. No debe omitir ningún pronunciamiento para responder los criterios de acusación de parte del fiscal y los criterios de defensa de parte del acusado; de lo contrario la sentencia sería nula.

La impugnación

Para José Alberto Montoya Pizarro en su ensayo Proceso Penal Ordinario sobre la impugnación precisa que:

Es un derecho como recurso que tiene el justiciable parte de un proceso; como mecanismo procesal de defensa ante cualquier resolución judicial que a su criterio le cause agravio; se materializa con su interposición, a fin de que el Superior jerárquico, la Sala Penal de la Corte Suprema, expida la resolución definitiva que la confirme reforme, revoque o anule el acto impugnado, con lo cual finalizará el proceso penal ordinario. (Montoya, 2011, p.59)

Cuando un juez o un tribunal emite una resolución judicial, se da el caso en que una de las partes no está de acuerdo con dicha resolución, es por ello que las

partes tienen a su disposición los recursos impugnatorios, para los cual deberán materializarla mediante un escrito, en donde fundamente sus motivos de impugnación, debiendo presentarla en el plazo establecido en las normas según el proceso y resolución materia de impugnación.

Entre los distintos medios impugnatorios, el adecuado para impugnar una sentencia es la apelación que tiene como fin que el juez o tribunal superior al que la emitió, revoque o confirme la sentencia, es aquí donde nos detenemos a ver el efecto suspensivo de la apelación sentencias que consiste en no ejecutar la sentencia mientras es resuelta la apelación.

Por su parte Cubas (2015) clasifica a los recursos impugnatorios en ordinarios y extraordinarios, indicando que los recursos ordinarios son aquellos recursos que proceden con normalidad sin que medien requerimientos adicionales como lo es el recurso de apelación; y los recursos extraordinarios son excepcionales y sólo proceden contra algunas resoluciones y por motivos indicados por ley ejemplo la casación.

El Recurso de Apelación

La Constitución Política del Perú en su artículo 139° regula los Principios de la Administración de Justicia y en su inciso 6 reconoce como principio de la función jurisdiccional la pluralidad de instancia, otorgando con esto a las partes de todo proceso el derecho la posibilidad de que las decisiones judiciales sean revisadas cuando no están de acuerdo con ella o parte de ella, asimismo otorga la posibilidad de que las dichas resoluciones sean revisadas no sólo en los resultados de órgano que la emitió si no también su actividad procesal.

Cubas (2015) con referencia al recurso de apelación indica que el recurso de apelación se plantea contra resoluciones judiciales que son emitidas durante el proceso y contra las sentencias finales en primera instancia en el proceso, es aquí donde cuando se busca llegar a la segunda instancia en donde se encuentran los superiores jerárquicos de la instancia que emitió la sentencia recurrida, derecho a la doble instancia a la que se hace referencia el el artículo 11° de la Ley Orgánica

del Poder Judicial.

Claux Roxin (como se citó en Villegas, 2014) indicare que el recurso de es un recurso extenso que conlleva a la evaluación jurídica de todo lo realizado.

La Ejecución de la Sentencia

Peña (2011) indica que la ejecución de sentencia, es la etapa en que se cumplen las disposiciones indicadas en la sentencia, dichas disposiciones que ameritan título ejecutivo, y las cuales tendrán efectos que caen directamente sobre los bienes del condenado, referidos a la sanción penal y a los costos de la reparación civil poost-delicto.

Con relación a la realización de la sentencia Gonmez –Orbaneja (como se citó en Peña, 2011) indica que la ejecución penal se encuentra conformada por todos aquellos actos que son de necesidad para que los términos de la sentencia condenatoria con relación a la sanción puedan ser realizados. Asimismo Hinojosa Segocia (como se citó en Peña, 2011), conceptúa a la ejecución en el proceso penal como un conjunto de actos conferidos a los órganos judiciales quienes tienen la potestad legal para realizar dichos actos, que tienen como finalidad cumplir las decisiones establecidas en un fallo o resolución judicial ejecutable emitida en un proceso penal, las mismas que se encuentran arreglados a ley.

Gimeno Sendra (como se citó en Peña, 2011) refiere que la ejecución penal es una acción ordenada que busca dar cumplimiento a los títulos de ejecución, acción que se encuentra fiscalizada por los órganos jurisdiccionales.

Si bien es cierto, en el caso de los autos de sobreseimiento o de una sentencia en donde se dispone la absolución del imputado se requiere ciertos actos de las entidades judiciales, ya que estas resoluciones ponen fin al proceso y con ello se genera el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales por lo que indica Peña (2011) que “el único título que genera ejecución penal es la sentencia condenatoria” (p. 637) lo que es afirmado por Moreno Cantena (como se citó en Peña, 2011) quien considera que estas decisiones no general actividad de

ejecución por propiamente dichas, y que sólo generan el efecto de levantar y dejar sin vigencia las medidas cautelares y reales.

La ejecución de la sentencia en el código penal militar policial:

“Artículo 463°.- Las sentencias condenatorias sólo podrán ser ejecutadas cuando tengan el carácter de cosa juzgada.”

En este caso la apelación de la sentencia tiene efecto suspensivo por mandato expreso de la misma norma la indicar que para que una sentencia condenatoria no será ejecutada mientras no sea declara cosa juzgada, lo que no permite que la sentencia se cumpla hasta que adquiriera dicho carácter. Es por ello que este trabajo se centra en determinar cuáles son las consecuencias que se podrían dar durante ese periodo de apelación con efecto suspensivo, ya que toda ejecución de sentencia se suspende, y podrían ocurrir supuestos que impidan que esta sea ejecutada si esta es confirmada por el órgano superior.

El Código de Justicia Militar derogado, aprobado por Decreto Ley N° 23214 y modificado por Ley N° 26677, establecía en su artículo 361, lo siguiente:

Artículo 631.- La remisión de la causa al Consejo Supremo de Justicia Militar, en revisión, apelación o consulta, no impedirá que el encausado sea puesto en libertad bajo la vigilancia de la autoridad, si la sentencia fuese absolutoria o hubiese sido sobreseída. Lo mismo se hará si el acusado ha cumplido la pena impuesta con la detención sufrida. Cuando se dicte sentencia condenatoria contra el acusado que esté libre, éste, si no es Oficial en servicio activo, quedará en detención mientras se lleve a cabo la revisión de la sentencia o se resuelva la apelación que se hubiese interpuesto. Las sentencias condenatorias contra oficiales, sólo podrán ejecutarse cuando el fallo quede firme, aplicándose entonces al mismo tiempo que la pena privativa de la libertad la accesoria de separación del servicio durante el tiempo de la condena. (Código de Justicia Militar Policial, 2006)

Con la legislación anterior, al interpretar la norma era evidente la preocupación por garantizar la ejecución de la sentencia, al disponer como medida preventiva que los efectivos de las fuerzas armadas y policiales con sentencia condenatoria que se encontraban en situación de retiro queden en detención hasta que la

apelación sea resuelta, sin embargo eximia de esta detención cuando el efectivo se encuentre en actividad debido a que contaban de cierta forma con un arraigo laboral; sin embargo hoy en día dicha regulación no sería benéfica para la administración de justicia ya que dicho arraigo laboral no impide que el sentenciado no se dé a la fuga, máxime cuando éste tenga conocimiento que puede ser privado de su libertad por haber cometido un delito de función.

Cumplimiento de la sentencia en el Código Procesal Penal

El Código Penal en su artículo 399° referido a la sentencia condenatoria prescribe que una vez leída la sentencia condenatoria y si el acusado se encuentra libre, es decir no se encuentra cumpliendo prisión preventiva, el juez podrá ordenar la prisión preventiva cuando considere motivada y razonablemente que el condenado no se someterá a la ejecución de la sentencia cuando esta haya quedado firme.

Artículo 402.-Ejecución provisional

La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.

Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288° mientras se resuelve el recurso. (Código Procesal Penal, 2004)

Artículo 418.- Efectos del recurso de apelación

El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia.

Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. (Código Procesal Penal, 2004)

A diferencia de la jurisdicción militar policial, en el fuero común en donde se aplica el Código Procesal Penal el legislador reguló la ejecución provisional de la pena con la cual se otorga al juez, de creerlo conveniente, la potestad de disponer la ejecución provisional de la sentencia, a fin de obtener la seguridad que el condenado se someterá a la ejecución de la sentencia cuando la apelación haya sido resuelta y la sentencia confirmada por el órgano superior. De no existir esta ejecución provisional de la pena el condenado podrá sustraerse del proceso y encontrarse ausente en la etapa de la ejecución de la sentencia, lo que impediría que se cumpla con los fines de la pena que son la de resocializar, rehabilitar y reincorporar al condenado a la sociedad, siendo infructuosa la investigación y por ende todo el proceso penal al que fue sometido. Riesgo que se corre en el proceso penal militar policial al no existir en el Código Penal Militar Policial la ejecución provisional de la pena.

Suspensión de la Pena

Con este mecanismo se exceptúa transitoriamente la ejecución de la pena impuesta en la sentencia, siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, expresamente establecidos en la norma. Según Arias (2012) la justificación de la suspensión de la pena es solamente una necesidad preventiva, debido a que desde la posición de la prevención especial de la pena no es necesario que se ejecute la pena para que el sujeto activo no vuelva a delinquir, ya que ello también se puede conseguir con la suspensión, y con respecto a la prevención general consigue su finalidad con la sola advertencia de ejecutarse la pena impuesta si el sujeto reincide delictivamente durante el periodo de suspensión, logrando así su efecto intimidatorio.

Villegas (2014), respecto de la suspensión de la pena indica que:

La suspensión de la ejecución de la pena consiste en intercambiar la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba, durante el cual el condenado queda sujeto a un régimen de restricciones o reglas de conducta. Aquí el juez pronuncia la pena que considera es la que debe imponerse al condenado, pero

suspende su efectividad a condición de que cumpla ciertas reglas de conducta” (Villegas, 2014, p.124)

La suspensión de la ejecución de la pena es un mecanismo alternativo a la sanción penal y en nuestro país se encuentran regulados dos de estos mecanismos como son la reserva del fallo condenatorio y la suspensión de la ejecución de la pena, dichos mecanismos fueron creados con la finalidad de evitar o limitar la imposición de la pena privativa de libertad de corta duración, ya que Según Navarro Althaus (como se citó en Villegas 2014) las penas privativas de libertad de corta duración tienen ciertas desventajas ya que al durar tan poco la prisión no es posible llevar a cabo el tratamiento de resocialización del condenado ya que se requiere de mayor tiempo para esto y que por lo contrario se aleja totalmente del medio social y laboral lo que sería contraproducente para su resocialización.

Asimismo Heinrich y Thomas (2014) sostienen que “con el instituto de la suspensión condicional de la pena (o a Prueba) de la pena el legislador creó en el año de 1953 un medio sumamente razonable y flexible para ejercer una influencia resocializadora sobre el autor sin privación de libertad” (p.1245).

En nuestro Código Penal Peruano vigente en su artículo 57°, existen requisitos para aplicar la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena entre los que se encuentran que la pena privativa de libertad a imponerse sea menos de cuatro años, que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito y que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.

Si bien es cierto en lo anterior tocamos el tema de la suspensión de la ejecución de la pena en el código penal, sin embargo esto no se encuentra regulado en el Código Penal Militar, es decir, para la justicia militar policial no existen requisitos para la aplicación de esta suspensión de la ejecución de la pena; por lo que para aplicarla tiene que remitirse supletoriamente al Código

Penal en base a la aplicación supletoria regulada en su artículo XV.

Llevado todo ello al tema de investigación, la situación se complica toda vez que, al impugnarse esta sentencia en donde se dispone la pena privativa de libertad del sentenciado, inmediatamente surte su efecto suspensivo de ejecución de sentencia, sin tener que mediar análisis de requisitos o cualidades del imputado alguna, este efecto suspensivo se da únicamente por la mera aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial, no dando opción alguna para que el juez penal militar policial pueda garantizar que el delincuente en su condición de condenado se dé a la fuga o que la sentencia pueda ejecutarse sin retraso alguno en caso de ser confirmada. Ya que en esta etapa del proceso ya se han actuado pruebas y se ha realizado el juicio oral en donde se ha comprobado que el imputado es responsable del delito que se le acusa, siendo necesario que la apelación de dicha sentencia no tenga efectos suspensivos con respecto a la persona (imputado).

Peligro Procesal

Roberto Cáceres Julca Cáceres y otro (2014) define al peligro procesal como “un presupuesto consistente en la posibilidad real de que el imputado ponga en peligro la investigación, a través de actos de confabulación que pueda tener con otras personas vinculadas a él o con terceros implicados en la acción de la justicia para que destruya, modifique u oculten los elementos de prueba de la comisión del delito”. (Cáceres y Otro, 2014, p.279)

Se refiere a todo tipo de obstrucción dentro del proceso, que puede llegar a impedir el normal desarrollo del mismo, en nuestro caso así se encuentra en la etapa de enjuiciamiento continúan existiendo peligros procesales.

Fuga del procesado

Cáceres y Luna (2014)

Este presupuesto se sustenta en la posibilidad de que el intervenido se sustraerá de la actividad de la justicia si es puesto en libertad, atendiendo a la gravedad del delito las fuentes o los elementos probatorios recogidos al momento de su detención, la

falta de arraigo, las circunstancias del hecho y la personalidad desplegada.(Cáceres y Luna, 2014, p. 2014)

Siendo el peligro de fuga el peligro procesal de mayor relevancia en nuestro tema, es necesario que el sistema adecue sus normas a fin de evitar el peligro de fuga y pueda concretarse el proceso ya que no sólo consiste en una emisión de sentencia, si no en la ejecución de la misma, y si ocurre el peligro de fuga la ejecución de la sentencia es imposible.

La Prisión Preventiva

Para apoyar nuestra posición podemos tomar como base la figura de la prisión preventiva que según De La Jara, Chavez, Ravelo, Grandez y Del Valle (2013) es una medida de precaución que se le impone a una persona restringiéndole legalmente la libertad, dicha medida es impuesta con la finalidad de garantizar una eficiente investigación, juzgamiento y cumplimiento de la condena de la persona a quien se le atribuye un hecho punible.

El derecho a la Libertad Individual

Si bien es cierto existe el derecho a la libertad individual reconocido en el segundo artículo de la Constitución Política del Perú, inciso 24 indica que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal”, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3° “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”, la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 7° inciso 1 “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9°; todas estas legislaciones internacionales de la cual el Perú es parte por haberlas suscrito y ratificado, protegen el Derecho a la Libertad Individual.

Sin embargo en ellas mismas se establecen los límites de dichos derechos siendo uno de ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su

artículo noveno en donde hace referencia a la libertad y seguridad personal como derecho de toda persona, sin embargo, en el mismo especifica la excepción en donde un individuo podría ser privado de su libertad siempre con arreglo a ley, lo que indica que la libertad individual no es un derecho absoluto si no que es relativo al existir presupuestos legales en donde se permite la privación de la libertad personal como en el caso de la comisión de delitos siempre y cuando se aplique el debido proceso.

La Presunción de Inocencia

Por otro lado, tenemos el Derecho a la Presunción de Inocencia que es un derecho establecido en la (Constitución Política del Perú , 1993) Artículo 2° inciso 24 e en donde prescribe que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” y protegido también por las mismas normas internacionales que protegen el derecho a la Libertad Individual, que de la misma manera es un derecho relativo por cuanto existen límites a dicho derecho que será restringido cuando el Estado a través de sus Órganos Jurisdiccionales en virtud del *Ius Punendi* ordene la pena privativa de libertad de una persona después de haberse obtenido los elementos de convicción que demuestren que la plena seguridad que el imputado tiene responsabilidad en el delito que se le imputa. Esto siempre respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Debemos tener en cuenta la necesidad de la ejecución de las sentencias, expedidas por el Tribunal Militar Policial, que contengan penas privativas de libertad sean cumplidas se deben dar cuando los delitos cometidos revistan de suma importancia para el Estado esto es en base al bien jurídico protegido, a la gravedad del delito y al grado de responsabilidad que se le haya atribuido al imputado, más aun tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que tienen como función garantizar la defensa, independencia, soberanía, integridad territorial y orden interno de su república.

Pues bien es necesario entonces fortalecer las bases de nuestra Justicia Penal Militar Policial e impartir justicia debidamente en este caso, implementando una figura que permita ejecutar las sentencias inmediatamente sin perjuicio de que estas puedan ser recurridas para así lograr disuadir la conducta delictiva de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por ello debemos agregarle la facultad del *Ius Puniendi* que es la facultad que tiene el Estado para sancionar los delitos y en este caso el derecho que tiene el Estado de asegurar la presencia del imputado a lo largo de todo el proceso, siempre respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad ya que al no cumplirse con la condena efectiva de prisión privativa de libertad en una sentencia condenatoria se podría dar pie a perjuicios por parte del condenado para impedir la continuación del proceso como el peligro de fuga.

Formulación del Problema

Problema General

¿Qué consecuencias tiene la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial?

Problema Específico 1

¿Cuál es el factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial?

Problema Específico 2

¿En qué medida se vulnera la administración de la justicia con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial?

Justificación del estudio

Noguera (2014) con relación a la justificación señala que “La justificación e

importancia de la investigación responde al porqué y para qué se efectúa la investigación. Puede basarse desde el punto de vista legal, al señalarse, por ejemplo, que existen en nuestra legislación penal (...)”

Justificación Metodológica

Hernandez, Fernandez y Baptista, (2010) indican que:

La investigación cualitativa se orienta a entender y ahondar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se elige cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. (Hernandez et al, 2010, p.145)

Justificación Práctica

El presente trabajo propone desde una perspectiva penal garantista, elaborar un mecanismo que garantice la ejecución de las sentencias con pena privativa de libertad sea esta impugnada o no, en los casos de mayor gravedad y con relación al grado de responsabilidad del imputado, respetando siempre los principios de razonabilidad y proporcionalidad a fin de que el Principio a la Presunción de Inocencia no sea vulnerado. Además este trabajo servirá a la institución militar policial como fuente de conocimientos en cuanto al efecto que tiene la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia impugnada, la relevancia que ello tiene ante la sociedad y podrán tomarlo como uno de los mecanismos que podrían contribuir a la función sancionadora y preventiva que tiene la pena en un proceso penal militar policial.

Justificación Teórica

El presente estudio se justifica por el interés y preocupación de crear un mecanismo para garantizar la ejecución de las sentencias que dispongan la pena privativa de libertad efectiva pese a que dicha sentencia sea recurrida por las partes, y evitar las dilaciones innecesarias en lo que resta del proceso penal militar policial. Este problema nace sin duda ante la regulación en el Código Penal

Militar Policial de la figura del efecto suspensivo de la ejecución de las sentencias cuando aún no tienen el carácter de cosa juzgada; por ello a fin de preservar el orden y la disciplina que caracteriza a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es necesario que exista el mecanismo adecuado que permita cumplir con la ejecución de las sentencias condenatorias así hayan sido impugnadas para asegurar la presencia del imputado en lo que resta del proceso, evitar la fuga del mismo y también disuadir las conductas delictivas de los sujetos activos de los delitos de función.

Objetivos

Hernandez et al. (2014) mencionan sobre los objetivos de una investigación, es la intención del investigador en coadyuvar, a resolver un problema específico; existen otras investigaciones que tienen el propósito en demostrar una teoría, se sugiere que los objetivos de una investigación deben manifestarse con claridad, concretos, medibles, ciertos, es decir, susceptibles de conseguirlos (p. 37)

Sirven como guías del estudio, para su planteamiento es necesario utilizar verbos en infinitivos y hay que tenerlos presentes durante todo su proceso de desarrollo.

Objetivo General

Determinar cuáles son las consecuencias de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Objetivo Específico 1

Determinar el factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Objetivo Específico 2

Determinar en qué medida se vulnera la administración de la justicia con la

suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Supuestos Jurídicos

Supuesto Jurídico General

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial podría traer como consecuencia impunidad y la fuga del sentenciado.

Supuesto Jurídico Específico 1

El factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial es la misma disposición de la norma que indica en su artículo 464 que las sentencias condenatorias sólo podrán ser ejecutadas cuando tengan el carácter de cosa juzgada.

Supuesto Jurídico Específico 2

Con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial se vulnera la administración de justicia en la medida en que generaría inseguridad jurídica ya que se estaría aplicando una norma que no contribuye con el fin de la pena.

II. MÉTODO

2.1 Tipo De Investigación

Este trabajo de investigación constituye un estudio de carácter descriptivo, se plantea medir, analizar o recolectar información sobre aspectos, conceptos o componentes del fenómeno a investigar, detallándose como se manifiestan los procesos.

Según Hernandez Sampieri “las investigaciones pueden ser de naturaleza exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, dependiendo del estado del conocimiento del problema y la perspectiva que se pretenda darle” (Sampieri, 2006, p.121)

La investigación realizada con métodos descriptivos es denominada investigación descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los estudios de caso único.

2.2. Diseño de Investigación

El diseño de esta Tesis Cualitativa es teoría fundamentada.

- **Teoría Fundamentada.-** Consiste en generar una hipótesis basada en los datos empíricos obtenidos del trabajo de campo en un entorno de estudio. El estudio se inicia con una pregunta general, no se apoya en un marco teórico previo.

Los estudios descriptivos en el Análisis de Datos Cualitativos (ADC) tratan de responder a las preguntas sobre que está sucediendo, cómo pretende proporcionar una imagen fiel de la vida, de lo que la gente dice, del modo en que la gente actúa, etc. son los propios lectores lo que extraen sus propias conclusiones y generalizaciones.

2.3. Caracterización de Sujetos

Este estudio esta basado en la aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial, por ende los participantes serían tanto los encargados de investigar y juzgar los delitos de función (Integrantes del Fuero Militar Policial) así como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que cometen dichos delitos.

2.4. Población y Muestra

Población:

- Especialistas en el Derecho Penal Privativo de la ciudad de Lima

Muestra:

- Cinco (05) especialistas en derecho penal privativo, un vocal, dos fiscales, un secretario de vocalía y un asesor de fiscalía, todos ellos pertenecientes al Fuero Militar Policial.

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha recurrido al

instrumento de recolección la guía de entrevista en busca de una mayor confiabilidad y a fin de lograr la obtención de resultados que persiguen nuestros supuestos.

Asimismo se ha recurrido al análisis de marco comparativo, análisis de una sentencia del emitido por el Tribunal Superior Militar Policial del Centro y análisis de una Resolución emitida por la Sala Suprema Revisora Militar Policial.

2.6. Métodos de Análisis de Datos

Descripción: organización de la información en matrices o figuras, se tiene que reducir y agruparlos por características.

Comparación: en estudios de comparación de categorías se compara unos valores con los otros y se interpreta.

2.7. Tratamiento de la Información: Unidades Temáticas, Categorización

Unidades Temáticas

Unidad Temática:	Definición:
Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad	Supone excluir temporalmente el cumplimiento de la pena fijada en la sentencia

Sentencia Apelada	Es el medio impugnatorio ordinario mediante el cual una de las partes o ambas, solicitan que un tribunal en segunda instancia examine y analice una resolución emitida dentro del proceso por el juez que conoce de la primera instancia, expresando sus inconformidades al momento de interponerlo, con la finalidad de que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus deficiencias, corrija sus defectos modificándola o revocándola.
-------------------	---

2.8 Aspectos Éticos

Las Investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas legales, sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio sociedad y de las organizaciones. Es decir, deben estar orientados a identificar las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a investigar, ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la información debe ser verificada, confiable y se debe guardar absoluta reserva de las personas que participan en la investigación. (Huamanchumo y Rodriguez, p. 190).

La presente investigación se ha realizado respetando los lineamientos establecidos por la universidad en cuanto a las indicaciones realizadas por el asesor metodológico, asimismo se ha respetado los derechos de autor citando mediante estilo APA – AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION.

Con respecto a la protección de la identidad, en caso las personas entrevistadas ostenten un cargo público, y deseen la mayor reserva de sus datos personales, se le respetará a través de seudónimos o códigos.

Para poder obtener resultados certeros con respecto a la problemática planteada, se contará con instrumentos con un grado de confiabilidad alto, con el fin de contar con los resultados mucho más objetivos.

III. RESULTADOS

3.1 Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista

A continuación se detallan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a especialistas en Derecho Penal Privativo; tomando en cuenta los objetivos propuestos en nuestra investigación.

Objetivo General:

Determinar cuáles son las consecuencias la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Perez, y Ponce (2017) sostuvieron que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada no asegura la ejecución de la sentencia si es que ésta es confirmada, porque se crea el peligro de fuga y por cuanto el imputado o investigado podría hacer abandono de cargo, dejando de lado el ius puneni del Estado, mellando los bienes jurídicos tutelados por el Código Penal Militar Policial.

Asimismo, Malca (2017) indicó que no se asegura la ejecución de la sentencia en caso de ser confirmada porque todo ser humano rehúye a estar privado de su libertad y en los casos en donde se ha adquirido la calidad de cosa juzgada, los condenados no se han presentado a cumplir la pena por lo que se dictó su ubicación, captura y conducción por intermedio de la Policía Judicial para la ejecución de la pena impuesta.

Con relación al peligro de fuga por parte del sentenciado Perez, Malca y Ponce (2017) coincidieron al indicar que al suspenderse la ejecución de la sentencia condenatoria si se crea la posibilidad del peligro de fuga por parte del sentenciado por cuanto el abandono de cargo produciría el acto de evasión de la pena impuesta y porque todo sentenciado a pena privativa de libertad no desea estar privado de su libertad y busca opciones de sustraerse, es decir fugarse para no cumplir la pena.

Por lo contrario Santos y Villaran (2017) sostuvieron que bajo la figura del derecho a la presunción de inocencia, principio de legalidad, debido proceso y encontrándonos en un sistema procesal penal acusatorio, adversarial garantista el procesado debe permanecer en libertad y se tiene que esperar si así está previsto en el ordenamiento jurídico penal militar policial. Con respecto a que si consideran que se crea la posibilidad de peligro de fuga por parte del sentenciado al suspenderse la ejecución de la sentencia condenatoria Villaran (2017) considera que la posibilidad de peligro de fuga existe en todo momento, y que

para ello existen requisitos existen requisitos debidamente precisados en el Art. 322° del CPMP, para disponer su detención, y estos se mantienen aun después de la sentencia de primera instancia, salvo que el Fiscal y Tribunal consideren que el hecho de haberse dictado una sentencia condenatoria, influirá determinadamente en lo referente al peligro de fuga, en todo caso, ello debería ser evaluado atendiendo a las circunstancias de cada proceso verificando la situación de actividad, disponibilidad o retiro del procesado, el arraigo, etc. Por su parte Santos (2017) respondió que el elemento subjetivo no tiene trascendencia en el proceso penal salvo que se demuestre lo contrario.

A continuación se consignan los datos obtenidos en las entrevistas con relación al **Objetivo específico 1**

Indicar que factor contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Perez, Malca y Ponce (2017) coincidieron al precisar que la aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial si puede ser utilizado por los sentenciados con la intención de evadirse de la justicia a sabiendas de su responsabilidad en los hechos que se le imputan, pues el artículo 464° del Código Penal Militar Policial suspende la ejecución de la pena y permite al condenado no cumplir la sentencia hasta la confirmación de la misma, y al ser conscientes que van a merecer una condena efectiva no están dispuestos a cumplirla.

Por su parte Villarán (2017) indica que si durante el proceso el sentenciado se ha encontrado en libertad, y ha demostrado voluntad de no huir el juzgamiento, el hecho de haber sido condenado en primera instancia, necesariamente no implica que este se fugará, para ello se debe haber evaluado como anteriormente también se ha señalado, la gravedad de los hechos y su vinculación con estos, su situación en el servicio, el arraigo, etc.

Y Santos (2017) indicó que todo depende de cómo termine el proceso en la instancia superior ante un recurso de apelación y también de no haber sido previsto por el fiscal en el momento oportuno con medios de pruebas suficientes.

Ante la pregunta si tienen conocimiento de algunos casos en que un sentenciado se ha evadido de la ejecución de sentencia Malca (2017), quien es el encargado de la ejecución de sentencias como secretario del Vocal Supremo Militar Policial, precisó que el 98% de casos que se ha llevado en la Vocalía en la que labora y que han sido condenados a pena efectiva no se han presentado a cumplir su sentencia; mencionando como ejemplo al General EP Arturo QUINTANA BRICEÑO, Coronel EP Jorge Angel FLORES EYZAGUIRRE, entre otros. Asimismo Villarán mencionó que conoce varios casos, por ejemplo el de un General que habiéndose encontrado durante todo el proceso en libertad, fue condenado por delito de Deserción, pero que al ser requisitoriado a nivel nacional, posteriormente fue detenido y actualmente cumple la condena impuesta.

Perez (2017) por su parte indicó que en su condición como Fiscal no, pero que si ha tenido conocimiento que existe procesados que tienen la condición de reo contumaz.

Y Santos (2017) indicó que dado el momento no podría indicar porque el nivel en que esta él solamente espera actuar en vía de ejecución sobre la sentencia dictada.

A continuación se consignan los datos obtenidos en las entrevistas con relación al

Objetivo Específico 2

Determinar en qué medida se vulnera la administración de la justicia con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Ante la pregunta si consideran que al suspenderse la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada se cumple con la función sancionadora y preventiva de la pena Malca, Perez y Ponce (2017) indicaron que no se cumpliría con la función de la pena al variar la condición del imputado en el proceso a reo contumaz, con respecto a la función preventiva no se cumpliría

porque el mensaje no es recibido por el personal uniformado en actividad y en la prevención especial el condenado tampoco asume las consecuencias de la pena.

Villarán (2017) indicó que la función sancionadora y preventiva de la pena prevista en el Inc. 1 del Art. IX del Título Preliminar del CPMP, se cumple cuando en plazo razonable y cumpliendo la garantía procesal del debido proceso se dictan sentencias condenatorias firmes arregladas a ley y al derecho.

Santos (2017) precisó que en un Estado de Derecho se tiene que respetar la ley y si así está prescrito que el juez no puede ir más allá que impulse el recorte a la libertad con aplicación de medidas excepcionales, por lo que deberá agotarse las instancias que es parte del proceso.

En una diferenciación entre el Código Penal Militar Policial y el Código Procesal Penal:

Villarán (2017) indica que el Código Penal Militar Policial es más garantista que el Código Procesal Penal; y Perez (2017) precisa que los Tribunales Militares Policiales al emitir fallo condenatorio deberían aplicar el mismo criterio por la gravedad de los hechos.

Ponce (2017) opinó que ambos artículos se contraponen y generan inseguridad jurídica por crear extremos opuestos dentro del proceso penal militar policial.

Malca (2017) indica que el Código Procesal Ordinario está acorde a los estándares de los códigos procesales de Latinoamérica la pena privativa de libertad se ejecuta inmediatamente dictada en primera instancia y en Código Penal Militar a fin de entender el enunciado y la intención del legislador, dicha regulación obedece a que el personal militar y policial que por lo general se encuentran en actividad, permanezcan laborando en sus instituciones hasta que recaiga resolución firme sobre la medida y/o en su defecto obtenga resultado favorable que impide que esté privado de su libertad preventivamente.

Y Santos (2017) indica que el Código del Fuero Común conocido como un código garantista respetando de manera esencial respetando los derechos y libertades de la persona, situación que ha provocado mayor hechos de violencia criminal por la demora del resultado; sin embargo, en la jurisdicción castrense también obliga a respetar los derechos fundamentales y las excepciones de recorte específico y debidamente acreditado.

Con respecto a la diferencia entre el Código Penal Militar Policial Y el Código Procesal Penal considerando que la justicia militar es de naturaleza ejemplarizadora, los entrevistados respondieron:

Malca (2017) indicó que efectivamente al ser uno de los fines de la pena según la naturaleza del Código Penal Militar Policial también debería ejecutarse la pena en primera instancia.

Ponce (2017) indicó que existe una diferencia por los vacíos de la normatividad que deben ser subsanados con plenarios para uniformizar criterios y cartillas de procedimientos sobre el tema.

Perez (2017) indicó que la diferencia se da por cuanto los bienes jurídicos protegidos son ligados a la esencia misma de la disciplina al ser instituciones jerarquizadas y de mando.

Villarán (2017) precisó que el hecho de ser ejemplarizadora no quiere decir que se vulneren derechos debidamente previsto en la norma procesal; si el Código Penal Militar Policial señala que sólo las sentencias condenatorias ejecutoriadas se ejecutan, es porque considera que la presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicte sentencia firme, y la privación de libertad, antes de dicha ejecutoria debe estar debidamente fundamentada conforme a las circunstancias que deben concurrir previstas en el artículo 322° del Código Penal Militar Policial.

Santos (2017) indicó que el Código Penal Militar Policial en el artículo IX del Título Preliminar prescribe como función de la pena, la sancionadora y preventiva y se

adecuan a los principios de proporcionalidad y razonabilidad previsto en el Código Penal Militar Policial.

3.2. Descripción de Resultados de la Técnica Análisis de Resolución:

A continuación se detalla la respuesta obtenida en el análisis de la Resolución N° 03 de fecha 05 de Agosto del 2016 emitida por la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial contra la Sentencia de la Sala Suprema de Guerra de fecha 17 de Mayo del 2016 en el expediente N° 001-2016-00-00 que se le sigue por la comisión delito de Exceso en Agravio del Subordinado, Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando, en agravio del Estado – Policía Nacional del Perú; el análisis de la resolución nos ayudará a dar respuesta para nuestro objetivo general. **OBJETIVO GENERAL:**

Determinar cuáles son las consecuencias la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

En la Resolución N° 03 de fecha 05 de Agosto de 2016 emitida por la Sala Suprema Revisora Militar Policial, que es de última instancia, se observa que en la sentencia de N° 05 -2016-SSG/Rel de fecha 17 de Mayo del 2015 se condena al imputado Coronel PNP (R) Omar Asunción Navarro Egusquiza a cinco años de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando, la misma que fue apelada por la defensa técnica del sentenciado. Por lo que la Sala Suprema Revisora en vía de apelación, decide confirmar la sentencia respecto a la condena del imputado, asimismo dispone remitir los actuados a la Vocalía Suprema del Tribunal Supremo Militar Policial, a fin que efectúen las acciones de ley para la búsqueda, ubicación, captura, e internamiento del sentenciado, para que cumpla con la condena impuesta. Demostrando así que el condenado se dio a la fuga y no se encuentra cumpliendo la condena impuesta, lo que es corroborado con el oficio N° 375-2016-TSMP-VS-1S mediante la Vocalía Suprema Militar Policial solicita la ubicación, captura y conducción del sentenciado, el mismo que tuvo que ser renovado con el Oficio N° 107-2017-TSMP-CS-1S, debido que hasta la fecha el condenado no ha sido capturado; es decir hasta el día de hoy el condenado se

encuentra como reo contumaz por haberse dado el peligro de fuga, por lo que es imposible cumplir con la condena.

3.3. Descripción de Resultados de la Técnica Análisis de Sentencia:

A continuación se detalla la respuesta obtenida en el análisis de la Sentencia de fecha 22 de Junio del 2016 emitida por el Tribunal Superior Militar Policial del Centro en el proceso seguido contra el Sub Oficial Brigadier PNP Alberto Salas Sovero y el Sub Oficial Técnico Wilder Mallque Arellanos, por el delito de Desobediencia, en agravio del Estado, Policía Nacional del Perú; el análisis de la sentencia nos ayudará a dar respuesta para nuestro objetivo específico 1.

Objetivo Específico 1

Indicar que factor contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial.

Comentario

Después de haber actuado pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados, el Tribunal falla mediante dicha sentencia condenar al Sub Oficial Brigadier PNP Alberto Salas Sovero como autor del delito de Desobediencia imponiéndole un año de pena privativa de libertad suspendida y al Sub Oficial Técnico Wilder Mallque Arellanos como autor del delito de Desobediencia imponiéndole un año de pena privativa de libertad efectiva; asimismo ordenaron que todavía hasta que la sentencia se encuentre consentida y/o ejecutoriada recién se ejecute, esto es debido a la aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial que prescribe que las sentencias condenatorias sólo podrán ser ejecutadas cuando tengan el carácter de cosa juzgada, probando con ello que la sentencia en primera instancia no se puede cumplir debido a que lo que contribuye a dicha suspensión de ejecución de pena cuando la sentencia es apelada es la regulación en dicho artículo, con lo que el sentenciado queda en total libertad de sustraerse del proceso, sin tener la certeza de que cumplirán con la condena impuesta.

3.4. Descripción de Resultados de la Técnica Análisis de Marco

Normativo:

Objetivo Específico 2

Determinar en qué medida se vulnera la administración de la justicia con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

Después de analizar el artículo 464° del Código Penal Militar Policial y el artículo 402° del Código Procesal Penal se ha llegado a establecer que entre estos dos artículos vemos una clara diferencia, por un lado, mediante la aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial la justicia militar policial se ve impedida de poder ejecutar provisionalmente la sentencia mientras no se hayan agotado las instancias por lo que el condenado debe de quedar en libertad por la sola apelación de sentencia pese a que puede ser culpable de los hechos que se le imputan; y según el Código Procesal Penal el juez tiene la posibilidad de disponer la ejecución de la sentencia cuando estime pertinente, es decir cuando considere que el condenado no se va a someter a la ejecución de la sentencia, es decir cuando exista el riesgo de peligro de fuga pese a que dicha sentencia sea apela, debido a que a estas alturas del proceso ya ha existido un juicio de valor y se han actuado pruebas; para poder ejercer así el ius punendi del Estado.

IV. DISCUSIÓN

A continuación se muestra la contrastación de ideas en nuestro trabajo de investigación, discutiremos la coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos en nuestros instrumentos de investigación, antecedentes y

marco teórico:

Empezaremos por el artículo 464° del Código Penal Militar Policial que es donde radica nuestro tema de investigación al prescribir que: las sentencias condenatorias sólo tendrán el carácter de cosa juzgada, analizando dicha norma se puede deducir que las sentencias en primera instancia no serán ejecutadas hasta que la sentencia quede firme, entonces debemos preguntarnos si esta regulación garantiza la ejecución de la misma si esta es confirmada; muy por el contrario en el fuero común con el Código Procesal Penal se tiene tres artículos en donde el legislador a efectos de evitar la fuga del procesado implementó la figura de la ejecución provisional de la sentencia detallado en los siguientes artículos:

Artículo 399.- Sentencia Condenatoria

Prescribe que una vez leída la sentencia condenatoria y si el acusado se encuentra libre, es decir no se encuentra cumpliendo prisión preventiva, el juez podrá ordenar la prisión preventiva cuando considere motivada y razonablemente que el condenado no se someterá a la ejecución de la sentencia cuando esta haya quedado firme.

Artículo 402.-Ejecución provisional

La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.

Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288° mientras se resuelve el recurso.

Artículo 418.- Efectos del recurso de apelación

El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia.

Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad

efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse.

Si bien estamos hablando de dos códigos aplicados en jurisdicciones distintas debemos remitirnos a la función de la pena en cada una de ellas mientras que el fuero común la pena es preventiva, protectora y resocializadora, esto con el fin de reinsertar nuevamente al sentenciado a la sociedad, en el fuero privativo la pena tiene función sancionadora y preventiva, esto con el fin de primero sancionar al delincuente que pese a ser un militar o policía y haber llevado una formación castrense, tomó la condición de delinquir en agravio de los bienes jurídicos protegidos por el Estado, el mismo Estado que le dio dicha formación castrense para proteger a la Nación y a la sociedad, más aun si el valor principal que existe dentro de estas instituciones castrenses es la disciplina la misma que es mellada cuando sus miembros cometen los delitos de función en contra de su propia institución; y segundo esta la función preventiva con la finalidad de prevenir que los demás miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales incurran en delitos de función. Visto de este modo ¿Cómo es posible que teniendo el Código Penal Militar Policial la función sancionadora y preventiva sea más flexible al momento de ejecutar sus sentencias? Cuando por la naturaleza de la formación las normas deberían ser más rígidas que en el fuero común por la gravedad de los hechos al tener como autores de los delitos de función a personas que fueron formadas con disciplina y lealtad hacia sus propias instituciones.

Con respecto al instrumento de la guía de entrevista, a la pregunta si considera que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial indicó que bajo la figura del derecho a la presunción de inocencia, principio de legalidad, el derecho al debido proceso y pluralidad de instancias se tiene que esperar si así está previsto en el ordenamiento jurídico, sin embargo no da respuesta a la pregunta realizada; sin embargo Schiaffino en su artículo titulado “El derecho a libertad personal y la incorporación de la ejecución provisional de condena efectiva en el código penal

militar policial” recomienda gestionar el proyecto de ley que propone la incorporación en el Código Penal Militar Policial de la ejecución provisional de la condena de pena efectiva sin perjuicio de la impugnación realizada a la sentencia en primera instancia, esto implica que se debe de ejecutar provisionalmente la condena, observando siempre, los derechos de la persona.

También encontramos una diferencia entre la respuesta de Santos mencionada anteriormente con la respuesta de Malca quien indica que esta suspensión de la ejecución de la sentencia no asegura la ejecución de la sentencia en caso de que ésta sea confirmada porque todo ser humano rehúye a estar privado de su libertad, además afirma que en los casos en que se ha adquirido la calidad de cosa juzgada los condenados no se han presentado a cumplir la pena, por lo que se tuvo que disponer su ubicación y captura por encontrarse prófugos de la justicia militar.

Malca también afirma que el 98% de casos que se ha llevado en la Vocalía Suprema Militar Policial en donde han sido condenados a pena privativa de libertad efectiva no se han presentado a cumplir su condena. Es decir si han existido casos en donde los condenados pese a tener la condición de ser militares o policías si se han dado a la fuga, como se demuestra con nuestro instrumento de Guía de Análisis de Resolución N° 03 de fecha 05 de Agosto de 2016 emitida por la Sala Suprema Revisora Militar Policial, que confirma la sentencia N° 05 - 2016-SSG/Rel de fecha 17 de Mayo del 2015 en la que se condena al imputado Coronel PNP (R) Omar Asunción Navarro Egusquiza a cinco años de pena privativa de libertad efectiva por la comisión del delito de Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando, también se dispone la búsqueda, ubicación, captura, e internamiento del sentenciado, para que cumpla con la condena impuesta. Demostrando así que el condenado se dio a la fuga por lo que se tuvo que pedir apoyo a la Policía Judicial para su ubicación y captura con el oficio N° 375-2016-TSMP-VS-1S, situación que se mantiene hasta la fecha, renovándose la solicitud de ubicación y captura con Oficio N° 107-2017-TSMP-CS-1S emitido en Marzo del 2017.

Sin embargo al preguntarle a Santos si considera que al suspenderse la ejecución

de la sentencia condenatoria se crea la posibilidad de un peligro de fuga por parte del sentenciado, su respuesta indica que el elemento subjetivo no tiene trascendencia en el proceso penal salvo que se demuestre lo contrario; por lo que vemos que con nuestro instrumento de análisis de resolución antes expuesto queda demostrado que si es posible el peligro de fuga.

A la misma pregunta Villarón responde que el peligro de fuga del procesado, existe en todo momento; sin embargo existen requisitos en el artículo 322° del Código Penal Militar Policial para disponer su detención; ante esto debemos precisar que este artículo hace referencia a las medidas cautelares, sin embargo dichas medidas no se pueden solicitar una vez emitida la sentencia, ya que si al emitirse sentencia se dispone una prisión preventiva esto sería como cumplir adelantadamente la sentencia y según el artículo 464° del código en cuestión las sentencias condenatorias no podrán ser ejecutadas hasta q tengan carácter de cosa juzgada.

Posiciones totalmente contrarias a las de Perez, Malca y Ponce quienes consideran que con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada si se crea la posibilidad del peligro de fuga.

A la pregunta si la aplicación del artículo 464° del Código Penal Militar Policial puede ser utilizado por los sentenciados con la intención de evadirse de la justicia Villarón responde que si el procesado se ha encontrado en libertad durante el proceso y ha demostrado voluntad de no rehuir el juzgamiento, el hecho de haber sido condenado en primera instancia, no implica que éste se fugará y que para ello se debe haber evaluado la gravedad de los hechos y su vinculación con estos, su situación en el servicio, el arraigo, etc. Contrariamente Ponce, Perez y Malca afirman que si puede ser utilizado por el sentenciado a sabiendas de su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

A la pregunta si consideran que al suspenderse la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada se cumple con la función sancionadora de la pena Malca, Ponce y Perez indican que no se cumple porque

se crea el peligro de fuga y si esto se da es imposible cumplir con dichas funciones, y Villarán indica que la función sancionadora y preventiva de la pena se cumple cuando se dictan sentencias condenatorias firmes arregladas a ley y al derecho. En mi opinión según Villarán se tendría que esperar a que las sentencias queden firmes para que la pena cumpla su función, es decir; si el sentenciado se encuentra presente cuando se ha resuelto la apelación, sólo así se podrá ejecutar dicha sanción, sin embargo si el sentenciado se encuentra prófugo no podrá ejecutarse la pena y con esto la misma no podría cumplir sus fines estipulados en el mismo Código Penal Militar Policial, tal y como nos indica nuestro Instrumento de Guía de análisis de resolución en donde el Coronel PNP (R) Omar Asunción Navarro Egusquiza se encuentra prófugo de la justicia por lo que cada seis meses se tiene que renovar la solicitud a la Policía Judicial su ubicación y captura, para que este pueda cumplir con la sanción impuesta.

V. CONCLUSIÓN

Con la presente investigación realizada podemos concluir que:

1. Las consecuencias de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial son que crea la posibilidad de que exista un peligro de fuga del sentenciado al quedar en completa libertad con el sólo hecho de apelar la sentencia impuesta, la sentencia no podrá ser ejecutada y una aparente impunidad.
2. El factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial es la disposición del artículo 464°, el mismo que indica que las sentencias condenatorias sólo podrán ser ejecutadas cuando tengan el carácter de cosa juzgada.
3. La Administración de Justicia en el Fuero Militar Policial es vulnerada debido a que con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada se genera inseguridad jurídica ya que se está aplicando una norma que no contribuye con el fin de la pena establecida en el Código Penal Militar, estableciéndose que el 98% de los sentenciados a pena privativa de libertad efectiva no se han presentado a cumplir su condena después de que su sentencia haya quedado firme.

VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Sala Suprema de Justicia Militar Policial, establecer parámetros y/o mecanismos que permitan el cumplimiento de las sentencias emitidas por sus tribunales, eliminando la consecuencia de que exista la posibilidad de un peligro de fuga del sentenciado y evitando que se genere impunidad ante el delito cometido.
2. Para disminuir el factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena, se recomienda a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar elaborar un Proyecto de Ley que permita modificar el artículo 464° del Código Penal Militar Policial con relación a la ejecución de las sentencias condenatorias e implementar un mecanismo similar a la Ejecución Provisional en el Código Procesal Penal, resaltando que sólo se debe dar cuando el juez considere que el sentenciado no se someterá a la ejecución de la sentencia una vez confirmada esta, con la finalidad de asegurar la ejecución de sentencia cuando sea confirmada utilizando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
3. Se recomienda a los operadores de la Justicia Militar Policial, con sus sentencias crear seguridad jurídica en la administración de Justicia en el ámbito del Fuero Militar Policial y confianza de la población mediante su administración de justicia, ya que se trata de hombres a quienes se les confía la seguridad y soberanía de nuestra Nación, y bienestar de nosotros mismos.

VII. REFERENCIAS

Referencias Temáticas

- Bramont, L. (2002). "Manual de Derecho" Parte General . Lima: San Marcos
- Caceres y Luna . (2014). Las medidas cautelares en el Proceso Penal. Lima: Jurista editores.
- Código Penal Militar Policial. (2010).
- Constitución Política Del Peru. (1993).
- Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (s.f.).
- Donna, E.A. (2008). *Derecho penal Parte General*. Santa Fe: Rubinzal – Culzoni Editores
- De la Jara , E., Chavez, G., Rabelo, A., Grandez, A., & del Valle, O. (2013). La Prisión Preventiva en el Perú. Lima: Instituto de Defensa Legal.
- Declaración Universal de Derechos Humanos. (s.f.).
- Delgado. (2001). Perspectivas de la Justicia Militar en Venezuela.
- Navarro, A. (1999). *El sistema de penas en el CP peruano de 1991. En anuario de Derecho Penal 1997-1998. Lima*
- Frisancho, M. (2009). Manual para la aplicación del nuevo código procesal penal. Lima: Rodhas.
- Giles, A. B. (2014). Función de la Pena Militar Policial.

- Heinrich, H. y Thomas, W. *Tratado de Derecho Penal*. Berlín: Pacífico Editores SAC.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (s.f.).
- Peña, A. R. *Manual de Derecho Procesal Penal con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal*. Lima, Perú: San Marcos
- San Martín, C. (2001). *Derecho Procesal Penal*. Lima: Grijley.
- Schiaffino, J. A. (2014). El derecho a la libertad personal y la incorporación de la ejecución provisional de condena efectiva en el código penal militar policial. Lima: El Jurista del Fuero Militar Policial.
- Shaw, C. S. (2014). La suspensión de la ejecución de la pena - reglas de conducta y su incorporación en el Código Penal Militar Policial. Lima.
- Velasquez, P. (2009). ¿Ejecución provisional de la sentencia condenatoria? Especial referencia a los casos en que se fija una pena privativa de libertad. *Actualidad Jurídica*
- Villegas, E. J. (2014). *La suspensión de la pena y la reserva del fallo condenatorio. Problemas en su determinación y ejecución*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Referencias Metodológicas

- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación Científica*. México.
- Huamanchumo H. y Rodríguez J (2015), *Metodología de la investigación en las organizaciones*, 1ra. Edición Perú. Editorial Summit.
- Noguera, I. (2014). *Guía para elaborar una tesis de Derecho*.
- Rodriguez Gomez, G. y. (1996). *Metologia de la investigacion cualitativa* .
- Sampieri, H. (2006). "Metodología de la Investigación". México D.F.: Mc. Graw-Hill Interamericana.

VIII. ANEXOS

Anexo1: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Rosa Paola Arroyo Ventocilla

FACULTAD/ESCUELA: Derecho

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	“Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial”
PROBLEMA	¿Qué consecuencias tiene la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Cuál es el factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el Código Penal Militar Policial? - ¿En qué medida se vulnera la administración de la justicia con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial?
SUPUESTOS	La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial podría traer como consecuencia impunidad y la fuga del sentenciado.
SUPUESTOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> - El factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial es la misma disposición de la norma que indica en su artículo 464 que las sentencias condenatorias sólo podrán ser ejecutadas cuando tengan el carácter de cosa juzgada. - Con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial se vulnera la administración de justicia en la medida en que generaría inseguridad jurídica ya que se estaría aplicando una norma que no contribuye con el fin de la pena.
OBJETIVO GENERAL	Determinar cuáles son las consecuencias de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> -Determinar el factor que contribuye a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial. -Determinar en qué medida se vulnera la administración de la justicia con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad dispuesta por sentencia apelada en el código penal militar policial.
DISEÑO DEL ESTUDIO	<p>Descriptivo</p> <p>Teoría Fundamentada</p>

POBLACIÓN Y MUESTRA	El escenario a realizarse esta investigación es en el Fuero Militar Policial sede en Lima, como son 4 miembros entre jueces y fiscales del Tribunal Militar Policial, expertos en la administración de justicia militar policial quienes son los encargados de investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que se encuentren inmersos en la comisión de un delito tipificado en el Código Penal Militar Policial.
VARIABLES	<p>Variable Independiente: Sentencia apelada.</p> <p>Variable Dependiente: Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad.</p>